

Gaceta de



Puerto Rico

Year 1900—Office, Fortaleza 21

Año 1900—Oficinas, Fortaleza 21.

Official descriptions	\$ 1.75 per month
Private	1.25
Single copy (date of issue).....	.10
(old date).....	.20
Advertisement:10 per line

Subscripción oficial por un mes.....	\$ 1.75
Subscripción particular por un mes.....	1.25
Número suelto del día.....	.10
Número atrasado.....	.20
Anuncios la línea10

Published daily except Mondays

Se publica diariamente menos los Lunes

Entered at the P. O. at San Juan P. R. as Second class matter.

Year 1900

San Juan Puerto-Rico, Saturday November 3rd

No. 258

PARTE OFICIAL

ORDER

Be it ordered by the Executive Council of Porto Rico that the Judges of Election regularly appointed by Election Board have prior right to serve on November 6th. If any such were substituted on the 30th because tardy or ill, Judges who were appointed by District Board still have right to serve on 6th, if on hand as law requires. If not on hand, other Judges may appoint third Judge on that day as provided by order of Council dated October 26th, in case third Judge fails to be present as required. If two Judges present are of opposite political parties and cannot agree upon third Judge, they shall select as third Judge some one of the same political party as the absent Judge represented; if Judges of same politics they must select third Judge of opposite politics.

By order of Council, this November 1st, 1900.

(Signed) W. H. Hunt,
President of the Executive Council.

ORDER

Be it ordered by the Executive Council of Porto Rico, that the member of a Board of Election, and no clerk thereof shall be arrested or imprisoned upon election day, or upon the days before and succeeding election day for any offence cognizable by the Police Courts under General Order 195 dated November 29, 1899, except upon complaint of the entire District Board of Elections, or of all of the Judges of Election who are serving:

Any Alcalde or Police Officer violating the provisions of this order shall be subject to arrest and upon conviction shall be fined in any sum not less than one hundred nor more than five hundred dollars.

San Juan, Porto Rico, November 2nd, 1900.

Passed and approved.

(Signed) Wm. H. HUNT,
President, Executive Council.

(Signed) Chas. H. Magee,
Chief Clerk.

TRADUCCIÓN.

Ordénase por el Consejo Ejecutivo de Puerto-Rico, que á ningún miembro de una Junta de Elección, ni á ningún Secretario de una de dichas Juntas se le arrestará ni reducirá á prisión en el día de la Elección, ni en los días anterior y posterior al día de la Elección, por ninguna infracción de ley que caiga bajo la jurisdicción de los Tribunales de Policía, según la Orden General 195, fechada 29 de Noviembre, 1899, excepto en el caso de ser denunciado por toda la Junta electoral de Distrito ó por todos los Jueces de Elección que están desempeñando sus cargos.

Cualquiera Alcalde ú Oficial de Policía que quebrante lo dispuesto en esta orden, podrá ser arrestado, y probado que le sea el hecho, se le castigará con multa no menor de cien dollars ni mayor de quinientos dollars.

San Juan Puerto-Rico, 2 de Noviembre de 1900.

Votado y aprobado.

Wm. H. HUNT,
Presidente del Consejo Ejecutivo.

Chas. H. Magee,
Secretario.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE PUERTO-RICO.

SENTENCIA.—En la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico, á veinte y ocho de Septiembre de mil novecientos, en el recurso de casación por infracción de ley, que ante Nos pende, interpuesto por José S. Surís Marchani, al que se ha adherido el Ministerio fiscal, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal del Distrito de Mayagüez, en causa por estafa frustrada.—Resultando que por dicho Tribunal se dictó la expresada sentencia, en veintisiete de Febrero último, consignando los hechos en los siguientes resultandos:—
1º Resultando probado: que Don José S. Surís Marchani, como representante de su esposa Doña Emilia Cardona, seguía ante el Juzgado municipal de San German dos juicios verbales contra Doña Emilia Delgado, uno en cobro de ciento sesenta y cinco pesos y otro en cobro de setenta y un pesos; y habiéndose dictado sentencia el mismo día en ambos juicios declarando con lugar la demanda, se entró en el primero de ellos en el procedimiento de apremio con el embargo de dos casas propiedad de la deudora, y el día veinte y dos de Noviembre último, al hacerse el acta de adjudicación de las mismas al acreedor, se convino entre éste y Don Gonzalo Quiñones, como mandatario de Doña Emilia Delgado, que las expresadas fincas volviesen al dominio de la citada señora, previo pago por parte de ésta al acreedor de la suma de cuatrocientos pesos como saldo total de los créditos reclamados en ambos juicios, manifestando el Surís que la adjudicación que se efectuaba era pura fórmula, y quedando en su consecuencia por efecto de dicha transacción privada, definitivamente resueltos ambos juicios.— 2º Resultando probado: que por virtud del expresado convenio el acreedor Surís recibió en once de Diciembre último trescientos pesos en efectivo, que le entregó Don Fernando Rivera, por cuenta de Doña Emilia Delgado, la cual había vendido á dicho Sr. Rivera otra casa de su propiedad para efectuar el pago convenido con Surís, quien recibió los cien pesos restantes en un vale ó pagaré vencadero en Abril y otorgado por el Sr. Rivera á favor de la señora Delgado, y endosado por ésta á favor de Surís, quien terminó el arreglo y una vez ya en su poder la cantidad convenida, abusando de la confianza en él depositada por el representante de la señora Delgado, y prevaleciéndose de no haberse consignado en autos el arreglo verificado, instó el curso del juicio en cobro de los setenta y un pesos que estaban ya satisfecho, siendo embargada una de las casas objeto del convenio ó arreglo ya verificado entre Surís y Quiñones.—Resultando que el Tribunal de Distrito de Mayagüez calificó los hechos probados de delito de estafa, en grado de frustración, previsto y castigado en los artículos 558 caso 1º y 559 número 1º del Código penal, y estimando autor responsable del mismo por participación directa á José S. Surís Marchani, sin circunstancias modificativas, le condenó á la pena de multa en cantidad de mil quinientas pesetas y á indemnizar á la parte perjudicada con la suma de quinientas pesetas, debiendo sufrir en su caso el apremio personal correspondiente.— Resultando que contra esta sentencia se ha interpuesto por el procesado recurso de casación, por infracción de ley, que formalizó ante este Tribunal, autorizado por el número 1º del artículo 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, citando como infringidos por inaplicación el artículo 1º del Código penal, y por aplicación indebida los artículos 558 número 1º y 559 caso 1º del mismo Código, toda vez que en los hechos declarados probados no concurren los elementos esenciales del delito de estafa, que son el engaño y la defraudación, según así lo tiene declarado el Tribunal Supremo de Justicia de España en varias sentencias, entre otras las de 3, 12 y 14 de Enero de 1888.—Resultando que el Ministerio fiscal se ha adherido al recurso, interponiéndolo autorizado por el número 3º del artículo 849 de la ley mencionada, citando como infringidos los del Código penal 558 número 2º y 559 número 1º, por aplicación indebida, y el

565 por inaplicación en cuanto el engaño empleado por el procesado para la defraudación no es de los que menciona el artículo quinientos cincuenta y nueve del Código penal en su apartado 1º, y si otro no previsto en concreto por el legislador, y que está reprimido en el artículo 565 del mismo cuerpo legal.— Vistos, siendo Ponente el Juez Asociado Don José O. Hernández.—Considerando que sea cual fuere la calificación que en el orden moral merezcan los hechos declarados probados, éstos no presentan caracteres de delito alguno de estafa, pues no puede decirse que quien acude á los Tribunales en demanda de un derecho cualquiera; aunque lo haga con temeridad y mala fé notoria, estafe ó intente estafar á la parte contra quien se dirige, si para ello no emplea medios que por sí constituyan delito; lo que no sucede en el caso de autos, en que el recurrente se limitó á instar la continuación de un juicio, no obstante haberle sido satisfecha la cantidad que reclamaba, proceder que no puede confundirse con engaño alguno de los determinantes del delito de estafa, y al que no puede aplicarse el artículo 559 número 1º del Código penal, mal aplicado por el Tribunal sentenciador, ni el 565 del mismo Código, que por su inaplicación cita como infringido el Ministerio Fiscal.— Considerando que al calificar los hechos probados como delito de estafa, no siéndolo, cometió el Tribunal de Mayagüez el error de derecho del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, infringiendo las disposiciones legales que invoca la defensa del procesado, y que no constituyendo aquellos hechos delito ó falta que deban pensarse bajo concepto alguno, es improcedente el recurso que por adhesión ha interpuesto el Ministerio Fiscal, por el error de derecho del número 3º del mismo artículo.— Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar el recurso de casación interpuesto por José S. Surís Marchani, y sin lugar el que por adhesión ha entablado el Ministerio Fiscal, contra la sentencia del Tribunal de Distrito de Mayagüez, la que casamos y anulamos, con las costas de oficio; lo que con la sentencia que á continuación se dicta, se comunique al expresado Tribunal á los efectos consiguientes.— Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la "Gaceta oficial" lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— José S. Quiñones.— José O. Hernández.— José M. Figueras.— Rafael Nieto Abeillé.— Louis Sulzbacher.— Publicación. Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Sr. Juez Asociado del Tribunal Supremo Don José O. Hernández, celebrando audiencia pública dicho Tribunal en el día de hoy de que como Secretario certifico en
Puerto-Rico á 28 de Septiembre de 1900.—E. de J. López Gastambide, Secretario.

Junta local de Instrucción pública DE ISABELA.

No habiéndose presentado solicitudes para las Escuelas siguientes: una graduada en la población; una rural en Arenales-altos, esta Junta acordó anunciarlas nuevamente por espacio de diez días que vencen el 8 del próximo Noviembre, reuniéndose dos días después ó sea el 10 de Noviembre á las tres de la tarde en el salón del Ayuntamiento para resolver las solicitudes presentadas.

Isabela, Octubre 30 de 1900.—El Presidente,
Evaristo La Bastidas.

Junta local de Instrucción pública DE LA CAROLINA.

En sesión celebrada por esta Junta el día de hoy, se acordó prover por concurso la Escuela rural de niños del barrio de Cedros, que se halla vacante por renuncia del que la servía.